

Las elecciones estadounidenses de 1996

El panorama electoral en California

SUSAN F. RASKY

Esto no es inmigración " / Esto es una invasión. /Y ustedes están pagando por ella. Este mensaje en grandes letras sobre una fotografía borrosa que muestra supuestamente a un grupo de personas cruzando ilegalmente la frontera México-Estados Unidos, llegó por correo a miles de hogares de electores republicanos en el sur de California durante las semanas previas a las elecciones primarias de ese estado en marzo de 1996. Demostró ser una de las piezas de publicidad electoral más efectivas —y ampliamente copiadas— de los candidatos republicanos buscando ser electos a la legislatura del estado.

Un mensaje similar, que incluía además escenas de la frontera grabadas en video, fue presentado en televisión como propaganda electoral por el candidato republicano a la presidencia, Bob Dole. Esta propaganda salió en televisión durante varios meses del primer semestre de 1996 en algunas partes del Valle Central de California, una zona generalmente más conservadora que el resto del estado y en la que Dole necesita ganar por amplios márgenes para tener posibilidades de obtener los 54 votos electorales de California en las elecciones de noviembre.

Las mismas grabaciones provocadoras y frases cuidadosamente trabajadas que ahora aluden a la inmigración ilegal como uno de los principales problemas económicos del país que afecta los empleos, los impuestos, el gasto social y de salud pública, y aun los costos de seguridad pública para los californianos "que sí son trabajadores", fueron desarrolladas por los estrategas del gobernador Pete Wilson durante su campaña de reelección en 1994. El éxito que tuvo Wilson ese año al transformar la inmigración en un tema principal de campaña no sólo ayudó a revivir lo que hasta entonces parecía ser un intento de reelección sin posibilidades, sino que también ayudó a asegurar la aprobación de la Propuesta 187, la iniciativa electoral que reduce la prestación de una serie de servicios públicos a los inmigrantes ilegales.

En agosto de 1994, sólo tres meses antes de esa elección, la inmigración ilegal tenía el undécimo lugar en la lista de los temas de mayor preocupación de los electores, después de otros como el crimen, la economía o el control del contagio del SIDA ("Encuesta de campo", 3 de agosto de 1994). Al llegar el día de la elección, los electores clasificaban la inmigración ilegal como el problema número uno, arriba del crimen y los impuestos, de acuerdo con una encuesta realizada por *Los Angeles Times*. Pese a que escasamente la mitad de los votantes en esa elección declararon estar satisfechos con el papel que desempeñó el gobernador en su primer periodo y casi dos tercios, o el 63%, expresaron que creían que el estado andaba por mal camino, Wilson logró derrotar a su contrincante, la demócrata Kathleen Brown.

Es, por lo tanto, poco sorprendente que los estrategas de Wilson, que ayudaron a Dole a diseñar un "mensaje para California" para las elecciones presidenciales de este año, le hayan aconsejado que una posición dura y de gran cobertura pública sobre el tema de la inmigración sería esencial en ese estado. Es tan poco sorprendente, que cuando Dole eligió hace algunas semanas al excongresista y exsecretario de vivienda, Jack Kemp, como su candidato a la vicepresidencia, le pusiera como condición para aceptar el nombramiento invertir su opinión expresada oralmente en contra de la Propuesta 187. Y tampoco asombra

que la propuesta de reforma del sistema de bienestar social (*welfare*) aprobada por el Presidente Clinton hace algunas semanas, a pesar de las protestas de muchos de sus colegas del Partido Demócrata, incluyera una medida que suspenderá las prestaciones de *welfare* a los inmigrantes "legales" que no son ciudadanos estadounidenses. El Presidente, quien deberá ganar los votos electorales de California para obtener su elección en noviembre, ha declarado, mientras se opone a esta medida, que su inclusión no es motivo suficiente para vetar la propuesta de ley que le permite cumplir su promesa de campaña de 1992 de reformar el sistema de bienestar social.

El surgimiento del tema divisorio (*wedge issue*) en las campañas

El cómo y el porqué de la inmigración, o más precisamente las preocupaciones y los temores que despierta en sectores claves del electorado californiano, se han convertido en una herramienta cada vez más poderosa en la definición del discurso de ambas campañas, y la política pública no es simplemente resultado del trabajo de astutos consultores políticos o brotes periódicos de xenofobia que marcan la historia del estado. La explicación fundamental surge tanto de la estructura gubernamental y política de California, como de la confluencia de tendencias económicas y demográficas de las últimas décadas, que han convertido al estado en terreno fértil para lo que los practicantes políticos contemporáneos han denominado temas divisorios o *wedge issues*. Como su nombre lo indica, los temas divisorios son de tal naturaleza que los simpatizantes habituales de un partido político específico sienten una gran atracción hacia ellos, y al mismo tiempo atraen el apoyo suficiente de los electores del partido de oposición dividiendo su base electoral tradicional. Por ejemplo, la pena de muerte fue un tema divisorio a nivel nacional que los republicanos utilizaron de manera efectiva en la campaña presidencial de George Bush en 1988 para sacar provecho de la ansiedad pública por el crimen que evidentemente existía. Al subrayar la oposición del candidato presidencial demócrata, Michael Dukakis, a la pena de muerte, los republicanos lograron caracterizarlo como "blando" en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y hacer surgir, casi de la nada, un tema que ayudó a Bush a alcanzar la victoria. En California, la inmigración es sólo un ejemplo reciente de los llamados *wedge issues* políticos, y es claramente el tema más relevante en este año electoral A para la numerosa población de origen latino en el estado. Sin embargo, el crimen, los impuestos, las nuevas reformas al sistema de bienestar social, la política de educación y la eliminación de programas de *affirmative action* (legislación que le brinda ciertas ventajas a los grupos de minoría) son temas que tendrán presencia en las campañas para las elecciones presidenciales del Congreso y estatales en las próximas semanas, y son también temas que podrían afectar a la comunidad latina, en especial a quienes no tienen la ciudadanía estadounidense.

La estructura gubernamental

El contexto necesario para entender el clima político en California requiere de al menos una breve revisión de cómo funciona el gobierno del estado. El diseño básico ha cambiado poco desde que el estado se fundó en 1850 y refleja, en general, una profunda desconfianza hacia el gobierno central. California tiene un jefe del Ejecutivo -el gobernador— electo independientemente, y dos cámaras legislativas cuyos miembros son electos independientemente, la cámara baja o asamblea, con 80 miembros, y la cámara alta, o senado, con

40 miembros. Como es el caso en el gobierno federal, ambas cámaras deben aprobar una iniciativa legislativa antes de que pueda convertirse en ley, y aunque el gobernador tiene poder de vetar, su veto puede ser anulado con dos tercios del voto en ambas cámaras.

Los distritos electorales de la asamblea siempre han sido distribuidos de acuerdo con la población. Sin embargo, todavía hasta mediados de los años sesenta, los distritos electorales del senado se distribuían geográficamente, no dando a ningún senador representación en más de dos de los 58 condados del estado. Este sistema le brindó por mucho tiempo a las zonas rurales conservadoras una influencia enormemente desproporcionada en la cámara alta, incluso cuando la población del estado ya se había transformado en una población primordialmente urbana. En una decisión tomada en 1966, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que dicho sistema a nivel estatal violaba la garantía de la Constitución de los Estados Unidos de "una persona —un voto" y forzó al senado del estado a reproporcionar sus 40 distritos electorales de acuerdo con su población. El resultado inmediato fue el fortalecimiento de las zonas urbanas, en ese entonces dominadas por demócratas, pero el resultado más interesante y cada vez más problemático en un estado tan grande como California es que esencialmente no existe ninguna diferencia entre la asamblea y el senado, además del número de electores en los distritos representados por los miembros de cada cámara. Cada uno de los

80 miembros de la asamblea representa a unas 375,000 personas, y cada uno de los 40 miembros del senado representa aproximadamente al doble, en algunos casos dispersos en distritos que pueden extenderse cientos de millas. En contraste, cada uno de los 52 miembros del Congreso de los Estados Unidos por California representa a unas 572,000 personas, y ningún distrito electoral para el Congreso en todo el país tiene una población tan grande como cualquiera de los distritos electorales para el senado del estado de California. Aparte de la consideración de si un legislador estatal puede comunicarse adecuadamente con un número tan grande de miembros en su distrito electoral —sin contar además qué tanto puede atender a sus necesidades—, el tema del gasto de campaña es también preocupante. Los miembros de la asamblea deben postularse para la reelección cada dos años, y los senadores estatales, cuyos periodos de reelección son alternados de modo que sólo la mitad de la cámara se postula para reelección cada vez que hay elecciones, deben enfrentar a sus electores cada cuatro años. Los legisladores en ambas cámaras hoy en día gastan fácilmente 700,000 dólares en sus campañas, y gastar más de un millón de dólares en elecciones muy competidas no es inusual. Eso es más de lo que se gasta en la mayoría de las campañas para elecciones al Congreso estadounidense en cualquier parte del país.

La necesidad de acumular tales cantidades para campañas electorales es uno de los motivos por los cuales California se ha convertido virtualmente en la Meca de los consultores políticos profesionales. Incluso los candidatos a cargos locales contratan rutinariamente a consultores profesionales para manejar la recaudación de fondos, las encuestas de opinión y el "desarrollo de temas electorales" para sus campañas. En tal ambiente, la tendencia a utilizar el llamado tema divisorio o *wedge issue* —ya sea el crimen, la inmigración, el gasto social o el recorte de impuestos— prospera.

En cuanto a la estructura del gobierno de California, existen desde hace mucho tiempo otras dos características que son importantes para entender las operaciones políticas modernas del estado. La primera es el proceso de iniciativa y anulación, el cual data del movimiento de reforma del Partido Progresista a principios del siglo xx, y la segunda es el

requisito constitucional del estado de que las iniciativas de ley relativas a los impuestos y al presupuesto deben ser aprobadas por dos tercios del voto de cada cámara.

El proceso de iniciativa, que se ha adoptado ahora en otros estados del occidente, permite a los electores que acumulen suficientes firmas para sobrepasar la legislatura y convertir en ley sus iniciativas, al incluirlas directamente en el padrón electoral del estado para su aprobación. Originalmente destinado a proporcionar al público un control sobre los políticos y los poderosos intereses ferrocarrileros que dominaban la política californiana hace cien años, en las últimas décadas el mismo proceso de iniciativa ha sido utilizado en exceso por los intereses especiales contemporáneos y en algunos casos incluso por los legisladores que se comprometen a medidas controversiales con la esperanza de promover sus carreras.

La Propuesta 187, inicialmente percibida como extrema, incluso como causa de grupos marginales extremos, adquirió credibilidad e ímpetu cuando el gobernador Pete Wilson decidió apoyarla como parte de su campaña a la gubernatura en 1994. Una iniciativa para eliminar los programas de *affirmative action* permaneció por años como nada más que el débil esfuerzo personal de dos disgustados profesores universitarios hasta que el gobernador Wilson decidió adoptarla como su propia causa política. Este año aparecerá en el padrón electoral de noviembre. Incluso Bob Dole y Jack Kemp la han apoyado, invirtiendo ambos sus posiciones conocidas por muchos años a favor de tales programas para ayudar a remediar la discriminación pasada contra mujeres y minorías.

El mínimo de dos tercios del voto de la legislatura, requerido para la aprobación de iniciativas de ley referentes a impuestos y al presupuesto, ha sido durante la mayor parte de la historia de California un detalle burocrático sin consecuencia. Sin embargo, desde la década de los setenta, la aprobación de requisitos para iniciativas populares que establecen límites estrictos sobre los incrementos de impuestos y el gasto gubernamental, ha llevado a batallas presupuestales complejas y caóticas en Sacramento que han hecho casi imposible para cualquiera de los dos partidos formular una agenda política coherente y al mismo tiempo cumplir con el requisito legislativo del estado de que cada año quede equilibrado el presupuesto.

Gobierno por iniciativa

Sobre esta estructura básica del gobierno estatal, los californianos han agregado tres cambios legislativos importantes en los últimos 18 años, cada uno de ellos establecido a través del proceso de iniciativa, y cada uno a su manera es un factor que contribuye al incremento en el fenómeno de la política de *wedge issues*.

En 1978 los electores aprobaron la Propuesta 13, una medida que reducía drásticamente los impuestos de bienes raíces e imponía estrictos límites sobre futuros incrementos en dichos impuestos. Mientras los electores buscaban sin duda emitir el mensaje de que preferían un gobierno estatal más pequeño y menos intrusivo, la iniciativa obtuvo el resultado opuesto. Los impuestos de bienes raíces eran la principal fuente de financiamiento para los distritos escolares locales y toda una serie de otros servicios. Con la aprobación de la Propuesta 13, la carga del financiamiento de las escuelas públicas, y por ende el control sobre la toma de decisiones en la política de educación, cambiaron de las localidades al estado. La iniciativa antimpuestos fue seguida por una serie de medidas paralelas limitando la capacidad tanto de la legislatura como de los gobiernos locales de imponer impuestos y asignar el gasto discrecional.

En 1988, los electores liberales respondieron con una iniciativa que requería que el estado asignara entre el 40 y el 50% de los ingresos fiscales anuales, sobre todo a la educación primaria y secundaria, forzando así a la utilización de un mayor porcentaje de fondos estatales para ciertos servicios públicos y actividades locales. En términos prácticos, el efecto de estos dos imperativos –en apariencia contradictorios– sobre las tasas de impuestos y sobre el gasto educacional, es que aproximadamente dos tercios del presupuesto anual del estado se encuentra fuera del control del gobernador y de la legislatura. Incluso en los buenos tiempos económicos ha significado una mayor presión para cumplir con el requisito del presupuesto equilibrado, y ha sido evidente en los recortes de programas de servicios públicos y de bienestar social, y en la educación profesional. En malos tiempos económicos, en especial la profunda recesión del inicio de los noventa, la caída automática de ingresos redujo los fondos disponibles para las escuelas públicas.

Sin embargo, el efecto más grave a largo plazo de un proceso presupuestal dominado por lineamientos burocráticos un tanto contradictorios ha sido la incapacidad –algunos incluso dirían la falta de voluntad– del gobierno del estado de continuar invirtiendo en la infraestructura de California. En los últimos treinta años, con un marcado crecimiento en la población, el estado de California redujo su gasto en carreteras, puentes, sistemas de transporte, construcción de escuelas, etcétera, de un 30% arriba del gasto nacional promedio *per capita* a un porcentaje entre el 10 y el 20% abajo del promedio nacional *per capita*.

En 1990, los electores aprobaron una iniciativa que limita el plazo de gobierno de los asambleístas a un máximo de tres periodos de dos años y a los senadores estatales a dos periodos de cuatro años. El impacto real se sentirá este año cuando los últimos veteranos se vean forzados a dejar sus puestos. Mientras que los que apoyaban la medida caracterizaban el límite de periodos en la legislatura del estado como la manera de jubilar a los políticos de carrera "buenos para nada", el efecto más notable de dicha ley hasta ahora ha sido la movilización de tales políticos para buscar oportunidades en otros puestos gubernamentales de elección popular. En otras palabras, batallas electorales más competidas, una mayor demanda de consultores políticos para recaudar fondos de campaña y un mayor énfasis en temas divisorios controversiales para capturar la atención de un electorado cada vez menos interesado en el proceso.

Una demografía cambiante

Mientras la estructura gubernamental básica dicta –e incluso muchas veces frustra– el proceso político en California, es la demografía del estado la que guía la política. Desde que se fundó en 1850, el estado se ha caracterizado hasta cierto punto por lo que ahora llamarían "diversidad étnica": tribus de indígenas y colonizadores mexicanos que llegaron mucho antes que los primeros anglos que se aventuraron por esas tierras; los trabajadores chinos que construyeron las vías ferrocarrileras en el siglo XIX, y los inmigrantes japoneses que sembraban sus tierras en el Valle Central y que emigraron a varias partes de Los Angeles en los años veinte y treinta.

Pero el ambiente cosmopolita de San Francisco y la industria del cine en Hollywood, que le brindó *glamour* a un pueblo por lo demás dormilón llamado Los Angeles, reflejaban muy poco las características del estado entero. Hasta la segunda guerra mundial, California se podía describir como un estado no industrial, republicano y blanco. Desde 1900 sólo tres demócratas han sido electos a la gubernatura.

La movilización causada por la segunda guerra mundial impulsó un cambio económico y de población importante al surgir grandes olas de emigrantes del interior de todo el país hacia California para tomar los empleos disponibles en arsenales y talleres de construcción de bombas y aeronaves. Cuando terminó la guerra se quedaron, seguidos en números crecientes por otros estadounidenses que llenaron la necesidad de trabajadores capacitados para los empleos creados por las nuevas industrias de aviación y aeronáutica, y que a la vez formaron la base del sindicato laboral de un fortalecido Partido Demócrata.

Entre 1940 y 1951, la población californiana creció de un poco menos de 7 millones a más de 11 millones de habitantes. La creciente población se traducía en una mayor necesidad de escuelas, carreteras, parques y otros tipos de infraestructura. El gobernador que satisfizo tales necesidades fue Earl Warren, un republicano con el perfil de los reformistas políticos progresistas de principios del siglo XX, quien fue electo en 1942, fue reelecto una segunda y tercera vez, y después pasó a ser presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Durante la década de los cincuenta, la población de California estaba creciendo a porcentajes anuales mayores al 4%, más del doble del porcentaje de crecimiento nacional. Ya para 1958, cuando los californianos eligieron al demócrata liberal Pat Brown como gobernador, la población del estado era de 14.7 millones, y para principios de los años sesenta, California había sobrepasado a Nueva York como el estado con la mayor población en el país.

Los dos periodos de gobierno de Brown marcaron uno de los mejores periodos para el Partido Demócrata en el estado. Los demócratas tomaron el control de la legislatura del estado y lograron obtener el primer puesto en el Senado de los Estados Unidos desde 1939. Con ayuda del igualmente liberal –y podría decirse que hasta cooperativo– vocero de la Asamblea, Jesse Unruh, Brown supervisó la puesta en marcha de una agenda liberal ambiciosa y trascendente que incluía desde proyectos de distribución de agua y construcción de carreteras hasta la ampliación del sistema universitario estatal y leyes de derechos civiles vanguardistas. Unruh, mientras tanto, transformaba la legislatura de un cuerpo informal y conservador en uno altamente profesionalizado.

Pero para 1966 el ambiente político cambió. El republicano Ronald Reagan, quien lanzó una plataforma de conservadurismo fiscal y una línea dura hacia los protestantes contra la guerra de Vietnam, derrotó fácilmente a Brown ese año, no obstante el hecho de que la gran mayoría de los electores del estado estaban registrados como demócratas. Exceptuando los años de 1968 a 1970, cuando los republicanos ganaron la mayoría en la Asamblea, la legislatura permaneció bajo el control de los demócratas. El gobernador conservador Reagan y los legisladores liberales pasaron gran parte del periodo en estado de estancamiento. Reagan estuvo dos periodos en el puesto de gobernador, lo suficiente como para perfeccionar la retórica que convirtió a la "reforma del bienestar social" (*welfare*) en un lema de batalla conservador y para establecer un seguimiento nacional que impulsaría su carrera presidencial.

En 1974, Reagan fue reemplazado en la gubernatura de California por el hijo de Pat Brown, Jerry, un demócrata pero de pensamiento muy distinto al de su padre. Siendo liberal en lo referente a las políticas sociales e inflexible sobre la protección del medio ambiente, el Brown joven fue de alguna manera el predecesor de la filosofía del "gobierno reducido" que Bill Clinton adoptaría en su plataforma dos décadas más tarde. En su primer periodo, Brown logró la aprobación de medidas a favor de los trabajadores del campo, así como otras medidas de derechos civiles que se habían estancado durante los años de Reagan en la gubernatura, y los demócratas en la legislatura del estado obtuvieron enormes

mayorías electorales. En 1976 podían alardear de que casi dos tercios de los electores californianos se identificaban con el partido, mientras que sólo un poco más del 30% se identificaban como republicanos (encuesta anual del Field Institute).

Pero si el electorado estaba dispuesto a identificarse como demócrata, era aún primordialmente blanco al igual que la población del estado. En 1970 la población de California alcanzaba 19.7 millones de habitantes. Los anglos comprendían el 78%, los hispanos el 12%, los afroamericanos el 6.9% y los asiáticos el 0.6 por ciento. En la década entre 1970 y 1980, tanto la composición de la población como el clima político empezaron a cambiar drásticamente. Un auge económico, a mediados de los años setenta, comenzó a atraer a nuevos inmigrantes, esta vez del exterior de los Estados Unidos, de México y los países de la Cuenca del Pacífico. El auge económico también disparó los precios de los bienes raíces y, por lo tanto, los impuestos-respectivos. Los nuevos inmigrantes se establecieron en los centros urbanos de Los Angeles, San Francisco, San José, y los residentes anglos que llevaban más tiempo ahí fueron desplazados a los suburbios, aumentando la presión sobre el valor de propiedad y los impuestos de bienes raíces que llevaron a una protesta antimpuestos en 1978 y a la aprobación de la ahora infame Propuesta 13.

Ya para 1980, cuando la población del estado alcanzaba los 24 millones, los anglos comprendían un poco más del 66% del total, los hispanos el 19%, los afroamericanos el 7.5% y los asiáticos el 6.6%. Cabe hacer notar aquí el contraste existente con la composición de la población que votaba en 1980: 83% anglos, 7.6% afroamericanos (el único grupo minoritario cuyo voto era proporcional a su porcentaje poblacional), 6.6% hispanos y aproximadamente 3% asiáticos. En 1994, el año en que se aprobó la Propuesta 187, la diferencia entre los porcentajes de población y los de voto por grupo étnico era prueba de un estado en donde la política y el proceso legislativo eran guiados por un electorado que reflejaba cada vez menos las características de quienes fueron gobernados en otro momento. En 1994 la población de California era de 32.1 millones. Los anglos, que comprendían el 55% de la población total, constituían el 78% del electorado. Los hispanos, que comprendían el 27% de la población del estado, constituían solamente el 10% del electorado. Los afroamericanos, que representaban el 7% de la población, llegaban a constituir el 6% del electorado y los asiáticos, que comprendían el 10.3% de la población, constituían sólo el 3% del electorado.

Aunque los grupos de intereses de latinos esperaban que la inclusión de la Propuesta 187 en el padrón electoral llevara a más latinos a las urnas en California, ha sido más bien la aprobación de la medida legislativa que parece haber empujado a muchos a registrarse para votar y a adquirir la ciudadanía. Aun así, las proyecciones del Partido Demócrata en el estado, así como las del conductor independiente de encuestas Mervin Field, sugieren que en 1996 se notará un aumento lento pero constante en el voto latino y no un aumento radical.

De acuerdo con los cálculos de Field, la composición actual de los electores registrados en California es la siguiente: el 73% son anglos, de los cuales un 46% se identifican como republicanos, el 41% como demócratas y el 13% como "otra categoría"; los latinos comprenden el 15% de los electores registrados, de los cuales el 57% se identifican como demócratas, el 30% como republicanos y el 13% como "otra categoría"; los afroamericanos comprenden el 6% de los electores registrados, de los cuales el 82% son demócratas, el 7% republicanos y el 11% "otra categoría"; los asiáticos representan también el 6% de los electores registrados, de los cuales el 47% se identifican como demócratas, el 32% como

republicanos y el 21% como "otra categoría". En cuanto a la composición de los partidos, las estimaciones de Field muestran a los electores del estado divididos en 46% demócratas, 40% republicanos y 14% "otra categoría".

Las proyecciones iniciales de oficiales del Partido Demócrata del estado anticipan que los 12.1 millones de electores que participarán en las elecciones el 5 de noviembre serán el 76% blancos (anglos), el 12% latinos, el 6% afroamericanos y el 6% asiáticos.

¿Influencia étnica?

La redemarcación en cada década de los distritos legislativos y del congreso en el estado de California, después del censo que efectúa el gobierno de los Estados Unidos, siempre ha causado enormes disputas partidistas; las posibles ganancias o pérdidas son muy altas, debido al rápido crecimiento de la ya enorme población del estado. En los años cuarenta la delegación del Congreso estadounidense por California era de 23 miembros. En 1980, ese número había llegado a los 45 miembros y en 1990, después de una década en que la población aumentó a seis millones de habitantes, al estado se le concedieron otros siete puestos en el Congreso nacional, llegando a los 52 puestos. Ese es el número de puestos por estado en el Congreso más grande del país y de la historia.

Durante los años setenta y ochenta, el proceso de demarcación de los distritos en California fue dominado por el genio de un solo hombre, el congresista demócrata Phil Burton de San Francisco. Aunque Burton murió en 1983, a su trabajo partidista se debía la tergiversación (*gerrymandering*) de una serie de distritos legislativos y del congreso que mantuvo a los demócratas en el poder por mucho tiempo, después de que su verdadero poder político se había ya debilitado frente a sus electores. Estas maniobras llevaron a una amarga disputa después del censo de 1990 que involucraba no sólo a los demócratas y republicanos, sino también a los latinos que creían haber perdido terreno político debido a las maniobras de Burton. El caso llegó hasta la Corte Suprema Estatal, y cuando se delinearon de nuevo los distritos en 1992, la Corte, basando su decisión en las interpretaciones de la ley federal de derechos de voto, propuso siete distritos del congreso especiales con una mayoría latina.

Pero un distrito con una mayoría latina no es una garantía que tal distrito elegirá un candidato oficial latino. En la resolución de casos de derecho de voto de latinos, las cortes han adaptado la regla empírica desarrollada para la creación de distritos mayoritariamente afroamericanos en el sur del país: se debe tomar el 50% de la población y agregar un 5% adicional para cada "desventaja" que incluye edad, ingreso y ciudadanía. En otras palabras, se debe asumir que una población que comprende un porcentaje de latinos tan alto como el 65% puede ser necesaria para que un político latino tenga oportunidad de ser elegido debido a los altos porcentajes de no ciudadanos y el alto número de residentes menores de 18 años.

Esa teoría es sólo parcialmente efectiva en algunas partes del estado multiétnico de California, en donde, por ejemplo, un distrito puede contar con varios grupos que podrían ganar como minorías con menos del 50% de la población. Al menos tres de los distritos en California que tienen una mayoría latina son representados actualmente por anglos.

En la legislatura del estado la delimitación de los distritos sí ha aumentado directamente la representación latina. Desde 1986 el número de latinos en la asamblea, y en el senado del estado, se ha duplicado de 7 a 14 (10 en la asamblea y 4 en el senado). Si a los demócratas les va tan bien como lo esperan en las elecciones de noviembre, hasta tres puestos en la asamblea pueden ser obtenidos por latinos. Tomando esto en cuenta, los legisladores

latinos han reunido sus fondos de campaña para ayudar a financiar a los candidatos (latinos todos, menos uno) que han prometido votar por un vocero latino de la asamblea si son elegidos. Este tipo de maniobras políticas se ha facilitado irónicamente con los límites de periodos en el gobierno estatal, que han abierto más posibilidades de liderazgo en la asamblea para miembros más nuevos.

Mercados publicitarios y fórmulas vencedoras

Toda la Galia, como observó Julio César, estaba dividida en tres partes. Toda la California, como aprendería cualquier político buscando aunque sea sólo un puesto local, está dividida en 13 mercados publicitarios. Para candidatos que buscan un puesto a nivel estatal –como lo serían el de senador en el Congreso estadounidense, o gobernador, o presidente– eso significa campañas televisivas muy costosas para lograr llegar a un número suficiente de electores. En recientes campañas al Senado estadounidense y a la gubernatura, los candidatos han gastado 20 millones de dólares cada uno para lograr emitir sus mensajes.

Los mercados más poblados, y por lo tanto más costosos, son Los Angeles, en donde se concentra más del 45% de la población del estado y la zona de San Francisco, que cuenta con alrededor del 23% de la población del estado. Las zonas de Sacramento y de San Diego son el tercero y el cuarto mercados publicitarios más grandes del estado, y representan el 10.6 y el 8.6% de la población, respectivamente.

Mientras que la zona de San Francisco es mayoritariamente demócrata, los otros tres principales mercados publicitarios representan a electores más equitativamente divididos entre demócratas y republicanos. De los mercados más pequeños en el resto del estado, los más importantes son los del Valle Central de California, una zona que fue casi por completo demócrata hace treinta años, pero que ahora tiende a ser más y más republicana.

Es con base en el cálculo geográfico de los mercados de televisión y de dinero que los candidatos a puestos de nivel estatal planean sus estrategias con la intención de ganar en el estado de California. Para los republicanos el truco es ganar suficientes votos en San Diego, los suburbios de Los Angeles y el Valle Central para balancear la ventaja natural esperada de los demócratas en la zona de San Francisco. Para los demócratas, la estrategia básica funciona al revés, capturar la zona de San Francisco, acumular cuantos votos sea posible en las ciudades y los suficientes votos en los suburbios de Los Angeles y San Diego, y luchar para contrarrestar la ventaja esperada para los republicanos en el Valle Central.

Esta es la estrategia que los asesores de Dole le han recomendado para California. Pero a diferencia de Clinton, quien deberá ganar el estado para lograr regresar a la Casa Blanca, Dole podría juntar los suficientes votos electorales en otras partes del país como para no tener que preocuparse tanto por California. Con Clinton aún en ventaja en las encuestas de opinión en California, la decisión que ahora debe tomar el equipo de Dole es si vale la pena concentrar sus esfuerzos y fondos en una campaña intensiva en California, o si mejor limitar su campaña en ese estado y concentrar sus esfuerzos y recursos en otros estados en el centro-oeste donde tiene mayores posibilidades de ganar.

La decisión de Dole se complica aún más con la triste herencia que le dejó Bush en 1992. Bush simplemente abandonó el estado y se lo regaló a Clinton ese año, y la pérdida de los recursos del Partido Republicano y de la infraestructura de la campaña demostró ser catastrófica para los candidatos republicanos que buscaban ser electos para puestos en el Congreso estadounidense y en la legislatura de California. Al menos por ese motivo, se

puede esperar que Dole mantenga algún tipo de presencia financiera en el estado y que utilice un gran número de representantes de campaña, en particular, su compañero de campaña Kemp, quien es popular en el estado, en áreas claves como el Valle Central o los distritos donde los candidatos republicanos al Congreso enfrentan una elección difícil.

Ensayo presentado en la cuarta reunión del *Proyecto sobre México en la política estadounidense*, patrocinado por las universidades de Georgetown (John Bailey) y Johns Hopkins-SAIS (Riordan Roett) en Washington, DC.

Profesora Departamento de Periodismo, Universidad de California en Berkeley

Encuestas CNN/USA Today/Gallup

